

Ensayo

GUERRA A COMISIÓN: LIBERTAD OPERATIVA, COSTO POLÍTICO Y LA MUTACIÓN DEL ORDEN INTERNACIONAL

WAR ON COMMISSION: OPERATIONAL FREEDOM, POLITICAL COST, AND THE MUTATION OF THE INTERNATIONAL ORDER.

Por: Joaquín Morillo Phillpott

Universidad Católica de Córdoba ORCID: 0009-0003-4536-5388

Correo electrónico: joaquinmorillo16@gmail.com

Abstract

Este ensayo sostiene que la ampliación operativa de las “Private Military Companies” (PMC) no es un mero fenómeno técnico u aislado, sino una respuesta de las potencias que en orden de cumplir con sus respectivos objetivos estratégicos buscan maximizar su libertad de acción en el tablero global a un bajo costo político. Una vez entendido esto, la pregunta clave es: ¿En qué medida la tercerización de la violencia organizada por parte de las grandes potencias funciona como mecanismo para reducir el costo político doméstico de intervenir y, simultáneamente, reconfigurar las normas e instituciones del Orden Internacional Liberal? La externalización de funciones coercitivas a través de contratación subcontratación y alianzas con actores paramilitares permite a los estados proyectar poder con menores restricciones burocráticas y multilaterales, de esta forma se incentiva operaciones menos transparentes y menos sometidas a rendición de cuentas. El ensayo articula las categorías de *costo político*, *re-privatización de la guerra* y *orden post-weberiano* a fin de leer las rupturas y continuidades entre las operaciones de PMCs a principios del siglo XXI donde el “Liberal International Order” estaba en su auge y aquellas configuraciones más contemporáneas donde la legitimidad de este antiguo orden parece agrietada. La conclusión principal es que la privatización de la violencia externalizada no solo reduce costos puntuales para los gobiernos, sino también acelera una mutación de LIO hacia lógicas más realistas de poder.

Palabras Clave: Contratistas Militares Privados, Tercerización de la Violencia, Costo Político, Orden Internacional Liberal, Gobernanza Global, Re-privatización de la Guerra.

Abstract

This essay argues that the operational expansion of Private Military Companies (PMCs) is not merely a technical or isolated phenomenon, but a response by great powers seeking to maximize their freedom of action on the global stage at a low political cost in order to fulfill their respective strategic objectives. With this understanding, the key question is: To what extent does the outsourcing of organized violence by great powers function as a mechanism to reduce the domestic political cost of intervention while simultaneously reconfiguring the norms and institutions of the Liberal International Order (LIO)? The externalization of coercive functions through contracting, subcontracting, and alliances with paramilitary actors allows states to project power with fewer bureaucratic and multilateral restrictions, thus encouraging less transparent operations and less submission to accountability. The essay articulates the categories of political cost, re-privatization of war, and post-Weberian order to interpret the breaks and continuities between PMC operations at the beginning of the 21st century—when the LIO was at its peak—and more contemporary configurations where the legitimacy of this old order appears fractured. The main conclusion is that the externalized privatization of violence not only reduces specific costs for governments but also accelerates a mutation of the LIO toward more realist logics of power in the world.

Keywords: Private Military Contractors, Outsourcing of Violence, Political Cost, Liberal International Order, Global Governance, Re-privatization of War.

Introducción

“La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una realización de estas por otros medios” (Clausewitz, 1984, p.58)

Con esta afirmación, Carl Von Clausewitz legó una de las ideas más influyentes y también más malinterpretadas de la teoría política moderna. Frente a perspectivas que conciben a la guerra como un fenómeno autónomo, regido por su propia lógica técnica o estratégica,

Clausewitz insistió en que su esencia es profundamente política. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, esta concepción fue cuestionada por figuras como

Moltke o Ludendorff, quienes tendieron a desvincular la conducción política de la conducción militar, promoviendo una visión más tecnificada y operacional de la guerra. Es así, que este último, en “*Der totale Krieg*” (1935) tras la experiencia en la primera guerra mundial, argumenta una subordinación o pliego de lo político hacia lo bélico como base de una nueva doctrina de guerra total. Otros exponentes más contemporáneos como Mary Kaldor en “*New and old Wars*” (1999) o Herfried Münkler en “*The new wars*” (2005) no contemplan la viabilidad de la concepción clausewitziana en un contexto de guerra moderna donde los conflictos son difusos, asimétricos y no interestatales. Sin embargo, hoy, en un contexto internacional caracterizado por la fragmentación del orden internacional liberal (LIO) y la expansión de nuevos actores armados no estatales, reivindicar la centralidad política de la guerra no es un gesto nostálgico, sino una necesidad analítica. Comprender cómo y por qué los estados recurren a la violencia organizada ya sea de manera directa o tercerizada permite vislumbrar transformaciones más profundas en la estructura del orden internacional contemporáneo.

Estas objeciones planteadas por Kaldor y Münkler, aunque relevantes para describir las transformaciones empíricas de los conflictos armados, tienden a malinterpretar el núcleo de la tesis clausewitziana. Reconocer que las guerras pueden ser difusas, asimétricas y no interestatales no implica que su fundamento existencial no sea político, es decir, si bien la guerra en su base operacional y estratégica efectivamente se ha complejizado debido a los avances tecnológicos y doctrinarios que exigen los campos de batalla modernos, dicha noción no es excluyente a la dimensión política que denota la esencia misma de la Guerra. Bajo esta comprensión de dicho fenómeno diferenciamos el ¿cómo? del ¿por qué? o los fines de los medios precisamente porque la guerra es una práctica subordinada a fines estratégicos, cuya forma y modalidad reflejan los incentivos y restricciones que emergen de la estructura internacional. Recuperar la concepción clausewitziana de guerra es pertinente en la medida de servir como herramienta analítica para comprender procesos políticos internacionales contemporáneos. En este caso, dicha concepción implica reconocer que la violencia organizada sigue siendo instrumental a objetivos políticos, por lo tanto, y remitiéndonos al debate central, estudiar sus transformaciones permite identificar alteraciones más profundas en la distribución del poder y en la configuración de los órdenes internacionales. En este trabajo partimos de dos supuestos fundamentales, en primer lugar, que el LIO atraviesa una crisis y un proceso de reconfiguración; y en segundo lugar, que los órdenes internacionales se estructuran en función de incentivos, los cuales moldean las conductas de los actores estatales y

no estatales. En este sentido, la forma en que las potencias contemporáneas gestionan, tercerizan o privatizan la coerción ofrece una ventana por la cual analizar la reconfiguración del orden internacional liberal.

La crisis del “Liberal International Order”

Como se ha mencionado previamente, uno de los supuestos fundamentales de este trabajo es que el Orden Internacional Liberal (LIO) atraviesa una crisis estructural. Sin embargo, antes de desarrollar dicho diagnóstico es imprescindible precisar conceptualmente este término, dado que constituye una categoría central para la discusión. Ikenberry (2011) caracteriza al LIO a partir de los rasgos distintivos del internacionalismo liberal: *“The hallmarks of liberal internationalism—openness and rule-based relations enshrined in institutions such as the United Nations and norms such as multilateralism—could give way to a more contested and fragmented system of blocs, spheres of influence, mercantilist networks, and regional rivalries”* (p. 56). En esta línea, el autor sostiene que el orden internacional liberal contemporáneo es el producto histórico de la convergencia de dos grandes proyectos políticos. Por un lado, el proyecto westfaliano, basado en los principios de soberanía estatal, integridad territorial y no intervención; por el otro, el proyecto liberal, estructurado sobre el libre comercio, la seguridad colectiva y la institucionalización de normas y reglas. Ikenberry argumenta que dicha convergencia se consolida tras el fin de la Guerra Fria, momento en el cual la visión estadounidense del orden internacional y sus valores liberales logran imponerse sobre la alternativa soviética, configurando así un marco normativo e institucional hegemónico a escala global.

Más allá de su dimensión normativa e histórica, el LIO puede comprenderse de manera más precisa a través del enfoque relacional propuesto por Lake, Martin y Risse (2021). Estos autores definen a los órdenes como: *“systems of rule structured by relations of authority between states and other actors, based on varying mixes of coercion, consent, and contractual agreement”* (p. 3). En este sentido, el LIO representa una configuración específica de dichas relaciones de autoridad insertadas en una jerarquía global liderada por Estados Unidos tras 1945 (p.4). A diferencia de otros órdenes históricos más coercitivos, el LIO se sostiene por mecanismos de consentimiento y contractualidad institucionalizada, combinados con niveles acotados de coerción directa. Su legitimidad deriva de principios liberales compartidos y de la internalización de reglas multilaterales.

Sin embargo, esta red institucional y normativa no debe entenderse como una estructura inmune a las tensiones sistémicas. De hecho, diversos autores han argumentado que el LIO atraviesa actualmente una crisis estructural derivada tanto de las transformaciones en la distribución de poder internacional como de las dinámicas internas del mismo orden.

Ikenberry (2018) reconoce que, si bien el orden está institucionalizado, su estabilidad dependía en gran medida de la posición hegemónica de los Estados Unidos, cuyo liderazgo confería la seguridad colectiva y la orientación normativa que sostenían al sistema. El declive de estas nociones observado en la emergencia de potencias revisionistas y en el repliegue estadounidense ha mitigado la capacidad de coordinación y provisión de liderazgo que caracterizaba a la década de los '90, generando un contexto de fragmentación, competencia geopolítica y cuestionamiento de las normas multilaterales que solían ser las piedras angulares del orden internacional liberal.

Desde una mirada más analítica, Lake, Martin y Risse (2021) sostienen que el LIO se encuentra en una situación de crisis debido a una conjunción sin precedentes de dinámicas internas y amenazas externas que minan sus fundamentos. Internamente, la fragilidad del LIO proviene del resurgimiento de movimientos nacionalistas, populistas y anti globalistas dentro de sus estados centrales, fenómeno que se debe a las contradicciones inherentes del liberalismo, particularmente en su forma neoliberal, que ha generado consecuencias distributivas desiguales y en consecuencia una oposición social. Externamente, la estructura normativa del orden se ve desafiada por el ascenso de potencias competidoras que operan con sistemas políticos autoritarios y economías centradas en el estado, rechazando principios fundamentales del LIO como la democracia y la universalidad de los derechos humanos. Aunado a lo anterior, la vulnerabilidad sistémica del orden se ve agravada por fuerzas mayores tales como las amenazas del cambio climático o la pandemia de COVID-19, las cuales interactúan con las dinámicas internas y externas, volviendo al LIO más débil que nunca y sugiriendo a los autores que la combinación actual de desafíos podría ser cualitativamente diferentes a las dificultades que el orden ha demostrado ser capaz de superar en el pasado.

Si el orden internacional liberal se encuentra tensionado y en proceso de reconfiguración, ello no sólo debe entenderse como un fenómeno institucional o normativo, sino también como una representación de un cambio más profundo en los patrones de incentivos que estructuran el comportamiento de los actores internacionales. Los órdenes no existen en el vacío, sino que se forman y se moldean en función de las oportunidades y restricciones

que enfrentan los estados y otros actores relevantes en un contexto histórico determinado. En este sentido, los incentivos estratégicos (militares, políticos, económicos y normativos) juegan un papel central en la configuración y transformación de los órdenes internacionales. Cuando estos incentivos se modifican también se transforman las formas en que los estados persiguen sus objetivos de poder y seguridad, generando nuevas prácticas que reconfiguran el propio orden.

El papel de las PMCs

El papel que tienen las PMCs en el marco internacional actual está ligado fuertemente a la evolución en el modo de hacer la guerra moderna y sus efectos son vitales para entender la realidad internacional. Justamente por eso el estudio de la guerra como proceso técnico, aunque instrumentalmente político, es tan importante en los estudios de las Relaciones Internacionales. Reivindicar el estudio de la guerra en dicho marco teórico es reconocer las implicancias de esta en la realidad internacional a lo largo de la historia. Preguntarse qué habría sido de la expansión romana sin el perfeccionamiento de sus tácticas, de su capacidad de maniobra basada en formaciones cerradas y el principio de concentración de fuerzas; qué destino habría tenido el Imperio Bizantino si los otomanos no hubiesen incorporado la pólvora en su arte militar; cómo habría evolucionado la geopolítica europea si Rusia no hubiese recurrido a estrategias de defensa flexible frente a Napoleón; o qué rumbo que habría tomado el siglo XX sin el advenimiento de la bomba atómica, equivale a reconocer que los desarrollos militares y estratégicos han sido vectores determinantes de los grandes cambios históricos. Estos ejercicios contrafácticos no buscan reescribir la historia, sino subrayar que la guerra no es un epifenómeno, sino un elemento constitutivo de la dinámica internacional. Su estudio permite revelar los mecanismos a través de los cuales los estados persiguen objetivos políticos, transforman estructuras de poder y reconfiguran órdenes internacionales.

En este contexto de crisis y reconfiguración del orden internacional liberal, adquiere relevancia creciente el fenómeno de las compañías militares privadas (Private Military Companies, PMCs). Estas entidades privadas prestan servicios militares, logísticos y de seguridad que tradicionalmente eran monopolio de los estados, variando desde funciones de apoyo y entrenamiento hasta participación directa en operaciones armadas. Su expansión a partir de la década de 1990 especialmente en Irak y Afganistán y su creciente parti-

cipación en conflictos africanos y euroasiáticos reflejan una transformación profunda en las formas de conducción de la guerra. La evidencia documentada por Singer (2005) confirma esto, durante la intervención en Irak, los contratistas privados llegaron a superar el número de soldados regulares, mientras que en Afganistán representaron el 69% de la fuerza total del Departamento de Defensa-el porcentaje más alto registrado en cualquier conflicto en la historia de EE.UU (Congressional Research Service,2008). Más que una anomalía empírica, las PMCs representan un instrumento mediante el cual los estados buscan adaptar su accionar estratégico a las nuevas condiciones estructurales, operando con mayor flexibilidad en un contexto donde restricciones legales, normativas y políticas del LIO limitan las formas tradicionales de proyección de poder.

A partir de este diagnóstico, la pregunta que orienta este trabajo es: ¿En qué medida la tercerización de la violencia organizada por parte de las grandes potencias funciona como mecanismo para reducir el costo político doméstico de intervenir y, simultáneamente, reconfigurar las normas e instituciones del Orden Internacional Liberal? La tesis central sostiene que la expansión operativa de las PMCs no es un fenómeno aislado, sino una manifestación estratégica de los Estados frente a los dilemas de legitimidad y las restricciones operativas propias del LIO en crisis. Al tercerizar funciones coercitivas, las potencias maximizan su libertad de acción internacional, reducen sus costos y contribuyen, de manera directa o indirecta, a la reconfiguración del LIO a un orden internacional post liberal cuyo régimen en materia de defensa y seguridad sea de carácter híbrido, es decir, donde la frontera entre la coerción estatal y privada se vuelva cada vez más difusa.

Para sustentar esta tesis, el análisis se estructura en 3 ejes principales. En primer lugar, se examina el incentivo estratégico que subyace a la privatización de la violencia, analizando como la maximización de la libertad operativa y la reducción del costo político doméstico impulsan a los estados a externalizar funciones coercitivas. En segundo lugar, se profundiza en la configuración de un mercado global de la fuerza y la consecuente erosión del monopolio estatal de la violencia legítima, lo que consolida un orden post-weberiano basado en regímenes de coerción híbridos. Finalmente, se explora el papel de la privatización como catalizador de la transición post-liberal, argumentando que este fenómeno no sólo refleja, sino que acelera activamente la mutación de orden internacional liberal hacia dinámicas más fragmentadas, realistas y desreguladas.

Argumento 1: El Incentivo estratégico

Un dilema político:

Si la premisa de este trabajo postula que las PMCs operan como catalizadores de un orden internacional más realista, el análisis debe iniciar diseccionando la fricción estructural que las vuelve imprescindibles: la paradoja democrática de la coerción. Las potencias liberales contemporáneas se encuentran atrapadas en una contradicción arquitectónica fundamental. Por un lado, la inercia geopolítica y la preservación de intereses estratégicos les exigen una proyección de poder ágil y constante en escenarios de alta intensidad; por el otro, el propio andamiaje institucional que las legitima (el estado de derecho y los engranajes de la accountability electoral) opera como un freno inercial que penaliza la acción exterior. En este marco, el recurso de la privatización no debe leerse como un mero subproducto de la eficiencia del mercado, sino como un sofisticado ejercicio de arbitraje institucional. Los gobiernos han descubierto que pueden instrumentalizar las lógicas del derecho privado corporativo para evadir los mecanismos de rendición de cuentas del derecho público, escindiendo el acto de violencia bélica de la autoría política directa.

Este dilema se origina en los pilares mismos del estado liberal. Por un lado, el estado de derecho se somete el poder público a normas jurídicas e instituciones imparciales (O'Donnell, 2004), lo que en política exterior se traduce en la necesidad de autorizaciones legislativas, controles presupuestarios y escrutinio judicial para cualquier intervención militar. Por un lado, la naturaleza de la democracia (Dahl, 1971), con sus elecciones competitivas y libertades civiles, genera mecanismos de “accountability” que hacen a los gobiernos vulnerables a la opinión pública. Una literatura robusta en relaciones internacionales ha demostrado empíricamente la existencia de una “sensibilidad a las bajas” (casualty sensitivity), es decir, los ciudadanos de las democracias reducen su apoyo a los gobiernos en intervenciones prolongadas que conllevan costos humanos significativos (Mueller, 1973; Gelpi et al., 2006). De esta forma el costo político entendido como la pérdida de la legitimidad, apoyo electoral o viabilidad de coalición (Lake et al., 2021) se constituye como la barrera central para la acción exterior sostenida. Dicha “sensibilidad a las bajas” no es una mera abstracción teórica, sino una fuerza política cuantificable:

Stable Iraq Trends					
<i>Military action in Iraq was...</i>	June	Aug	Oct	Dec	Jan
%	%	%	%	%	%
Right decision	49	45	43	42	40
Wrong decision	44	46	47	51	51
Don't know	7	9	10	7	9
	100	100	100	100	100
<i>How it is going</i>					
Very/fairly well	53	41	35	32	35
Not too/at all well	43	55	59	64	62
Don't know	4	4	6	4	3
	100	100	100	100	100
<i>What to do now</i>					
Keep troops in	50	48	46	44	46
More needed	--	15	--	17	25
Enough now	--	24	--	20	14
Bring troops home	45	46	47	50	48
Don't know	5	6	7	6	6
	100	100	100	100	100

Esta encuesta (Pew Research Center, 2007) realizada en el punto neurálgico del conflicto iraquí captura este fenómeno con claridad; mientras que en junio de 2007 el 49% del público estadounidense aún consideraba que la decisión de intervenir militarmente en Irak era la correcta, para enero de 2008 esta cifra había caído al 40%. De forma paralela, la percepción de que el esfuerzo de guerra iba “nada bien” escaló del 43% al 64% en el mismo periodo. Esta erosión medible del apoyo público, directamente correlacionada con el prolongamiento y el costo humano del conflicto, cristaliza el “costo político” en su expresión más pura y ofrece el contexto imperativo para comprender la búsqueda de alternativas.

Ante esta posible limitación doméstica, la contratación de PMCs emerge como la solución estratégica que permite a los gobiernos sortear las restricciones del estado de derecho y la accountability democrática. La externalización de funciones críticas desde logística hasta seguridad y combate opera como un mecanismo de amortiguación del costo político. La evidencia documentada por Singer (2005) es reveladora, en Irak los contratistas privados llegaron a superar en número a los soldados regulares estadounidenses. La clave de esta eficacia reside en que las bajas de estos actores privados, así como sus acciones, no generan la misma presión política, mediática ni parlamentaria que las de los uniformados. Esta transferencia de riesgo no es un mero ahorro logístico, sino una reingeniería de la proyección del poder externo de los estados, es decir, es un incremento decisivo en su *Libertad*

Operativa, un concepto cuya arquitectura técnica merece un análisis detallado posterior.

Esta adaptación estratégica funciona mediante mecanismos precisos. Las PMCs proporcionan una capacidad de acción encubierta y negación plausible que las fuerzas armadas regulares, por su propia naturaleza institucional, no pueden ofrecer. Un convoy protegido por contratistas puede ser presentado como un “asunto de seguridad privada”; el mismo convoy protegido por soldados convencionales es inequívocamente un acto de estado. Esta ambigüedad calculada permite a los gobiernos mantener una presencia e influencia masiva en teatros de conflicto, al tiempo que diluye sus responsabilidades directas ante su propia ciudadanía y el derecho internacional. Es así, que la externalización, no sólo externaliza funciones, sino que externaliza y difumina el riesgo político, permitiendo operaciones continuadas que, si fueran ejecutadas por el ejército nacional de un estado, encontrarían una oposición interna insalvable.

Libertad operativa

Uno de los principales factores que incentivan a los estados a hacer uso de las PMCs como anteriormente mencionamos es el incremento en su libertad operativa. Dicho concepto posee una bidimensionalidad, es decir, una dimensión militar y técnica, y otra más relacionada a la política exterior de los estados. Es así que para la comprensión profunda de dicha categoría y su implicancia en el fenómeno PMCs resulta imperativo abarcar ambas dimensiones.

En la dimensión militar, la noción de libertad operativa que deriva de “*Freedom of action*” (FM 3-0) se refiere a la capacidad de una fuerza armada para mantener la iniciativa táctica y estratégica frente al enemigo, evitando que las condiciones del entorno o las restricciones impuestas por el mando político comprometan su eficacia. El FM 3-0 establece que todas las operaciones contemporáneas son *multidomain operations*, es decir, acciones que combina el empleo coordinado de capacidades conjuntas en los dominios terrestre, aéreo, marítimo, cibernético y espacial con el propósito de “crear y explotar ventajas relativas que permitan alcanzar los objetivos, derrotar fuerzas enemigas y consolidar logros” (U.S. Army, 2017, pp. 1-9). Bajo esta concepción, la libertad operativa no es un atributo estático, sino una condición dinámica que surge de la posibilidad de integrar recursos diversos y actuar con autonomía en escenarios caracterizados por la simultaneidad, la velocidad y

la convergencia tecnológica. En términos doctrinarios, la libertad operativa supone la preservación de la capacidad de maniobra y decisión en todos los niveles de la guerra (estratégico, operacional y táctico). El manual sostiene que las fuerzas deben poder “ver a sí mismas, ver al enemigo y comprender el ambiente operacional antes de identificar y explotar ventajas (U.S. Army, 2017, p. 114). Esta triada perceptiva revela que la libertad operativa depende tanto del control material sobre los medios de combate como del entendimiento situacional y cognitivo que permita anticipar, desorganizar y desarticular la coherencia del adversario. Desde esta perspectiva, la doctrina estadounidense concibe la libertad operativa como una forma de dominación epistémica del campo de batalla, donde el conocimiento, la movilidad y la sincronización multidominio sustituyen la antigua centralidad del poder de fuego o la masa numérica.

De la misma manera, dicho concepto se articula con la idea de “relative advantage”, definida en el FM 3-0 como toda posición que proporcione una oportunidad para avanzar hacia los objetivos. Mantener la libertad operativa implica precisamente crear, sostener y explotar esas ventajas relativas antes de que el enemigo logre imponer su ritmo operacional. En este sentido, la libertad operativa no se limita a la defensa de una posición, sino que constituye una actitud ofensiva permanente, un principio de acción orientado a fracturar las interdependencias del oponente y a impedir que este logre consolidar un equilibrio de fuerzas. De esta forma es viable afirmar que este concepto es un principio estructural de la guerra moderna, donde la iniciativa y la flexibilidad táctica se vuelven más decisivas que la mera superioridad numérica. La libertad operativa también guarda relación con la capacidad de sostener operaciones en profundidad y a largo plazo, sin depender de apoyos externos o de condiciones logísticas vulnerables. El manual describe a este atributo mediante los conceptos de *endurance* y *convergence* expresados como la habilidad de integrar todas las funciones de guerra (movimiento y maniobra, inteligencia, fuego, protección y sostenimiento) en un flujo continuo de acción coordinada. Es así que sin convergencia entre dominios no existe libertad de acción, y sin capacidad de sostener el esfuerzo a través del tiempo esa libertad se disuelve.

En la realidad, esto significa que una fuerza verdaderamente libre es aquella que puede decidir cuándo, dónde y cómo aplicar la fuerza, sin que su decisión dependa de los ritmos impuestos por otros actores o sus propias limitaciones logísticas. Un claro ejemplo de libertad operativa militar traspolada al fenómeno PMCs fue la captura de los campos de diamante de Kono en

Sierra Leona por la compañía Executive Outcomes en 1995. Contratada por un gobierno al borde del colapso, esta firma no se limitó a funciones de asesoría; planificó y ejecutó una ofensiva militar integral. La compañía desplegó capacidades de combate conjunto inusuales para un actor no estatal, integrando aviación de ala rotativa y fija, artillería de apoyo, vehículos blindados y equipos de operaciones especiales. Esta fuerza proyectó poder de manera autónoma, ejecutando maniobras ofensivas complejas que recuperaron el control territorial de zonas estratégicas en un plazo de 10 días. La operación demostró la capacidad de una PMC para generar efectos tácticos decisivos mediante una cadena de mando ágil y descentralizada, logrando lo que las fuerzas nacionales no pudieron, es decir, revertir la situación operacional y forzar al Revolutionary United Front a reanudar negociaciones (Vines, 1999). Este caso ilustra cómo la privatización permite a los estados acceder a niveles de iniciativa, movilidad y concentración de capacidades que constituyen la esencia de la libertad operativa en términos militares.

Por último, en el pensamiento operacional contemporáneo, la *Libertad operativa* representa la condición esencial para transformar ventajas tácticas en resultados estratégicos duraderos. No se trata únicamente de maniobrar efectivamente, sino de hacerlo con un propósito político coherente. En la doctrina multidominio, la libertad operativa cumple una función de mediación entre el plano técnico y el plano estratégico, entre la capacidad de ejecutar y la capacidad de decidir. De esta forma, el dominio de la libertad operativa militar constituye el fundamento técnico que posibilita la libertad operativa política. En última instancia esta libertad operativa militar es una herramienta estratégica al servicio del estado, que demanda condiciones operativas específicas como la iniciativa táctica, agilidad, mando descentralizado, inteligencia superior, sostenimiento logístico eficaz y capacidad para operar en múltiples dominios; si estas condiciones son satisfechas, dicha libertad posibilita la proyección de poder, la disuasión de amenazas y la consolidación de resultados operacionales, incluso en entornos altamente complejos y contaminados por restricciones externas.

Sin embargo y a pesar de esta extensa explicación la libertad operativa no es exclusivamente un fenómeno técnico o militar ya que como mencionamos dicha noción es instrumental al estado y por lo tanto tiene fines políticos. Es así, que la dimensión política de la libertad operativa se refiere al margen de acción que un estado posee para diseñar, decidir y ejecutar su política exterior y militar sin verse excesivamente constreñido por factores internos (opinión pública, instituciones, mecanismos de control) o externos (normas

internacionales, alianzas, diplomacia, reputación). Mientras la libertad operativa militar capta la capacidad técnica operacional para maniobrar, disuadir, sostener operaciones y explotar ventajas relativas, la política se encarga de legitimar ese uso del poder, de definir cuándo, cómo y con qué fines desplazar dicho poder. La libertad operativa política supone entonces autonomía de decisión, es decir, los estados deben ser capaces de escoger sus objetivos estratégicos, seleccionar los medios instrumentales adecuados y determinar los tiempos, sin que cada paso esté subordinado a la aprobación de actores externos o al temor de sanciones políticas domésticas o internacionales. Esta dimensión política se articula muy estrechamente con la militar. No existe libertad operativa si no hay respaldo político claro para su uso, pues una operación técnicamente viable puede quedar paralizada por debates parlamentarios, presiones legales, cuestionamientos mediáticos o falta de claridad sobre la autoría del estado. En otras palabras, la coordinación militar-técnica sólo tiene sentido si la política define los márgenes en los cuales maniobrar, si permite que la fuerza proyecte y decida sin obstáculos institucionales. Por ejemplo, en el caso de Libia, Siria, Ucrania y Yemen las PMCs han sido utilizadas para presionar, influir o intervenir sin desplazar fuerzas regulares visibles, lo que otorga al estado contratante mayor libertad política para maniobras diplomáticas, para controlar la narrativa internacional, para negar o minimizar su implicación directa. Esta estrategia política se apoya en la confianza de que la acción militar puede ser efectiva si se mantiene la capacidad militar técnica (capacidad de fuego, logística, inteligencia, iniciativa) pero se reduce el riesgo político de escándalos, de derrotas visibles o de costes electorales en estados democráticos.

Desde la perspectiva teórica, autores que analizan el fenómeno de las PMCs muestran que aquel margen operativo para decidir sin supervisión estricta, sin transparencia total y con opción de ambigüedad jurídica es uno de los motivos estructurales por los cuales los estados optan por ellas. El artículo *States, interstitial organizations and the prospects for liberal international order* señala que las PMCs operan en un espacio intersticial entre lo estatal y lo privado, permitiendo a los estados involucrarse en acciones bélicas sin asumir completamente las responsabilidades legales, políticas o reputacionales que implican las fuerzas regulares (Batora, 2021). Es por esta ambigüedad que los estados buscan maximizar su libertad operativa; mantienen su capacidad de proyectar poder, de influir en escenarios internacionales adversos, pero minimizan los costos vinculados a la rendición de cuentas, al escrutinio mediático y al control judicial o parlamentario.

Por consiguiente, el incentivo estratégico que subyace tras la libertad operativa se configura como una categoría central porque resume la lógica del poder estatal en el sistema internacional contemporáneo: proyección, difusión y consolidación de logros mediante la preservación de un margen de acción autónomo. Si bien esta libertad operativa militar exige condiciones operativas, su eficacia real se ve mediada y potenciada por la dimensión política que la legítima, dirige y permite. A partir de ello, lo que estaba reservado tradicionalmente al estado, es decir, el monopolio de legítima defensa se halla hoy erosionado. Las PMCs, mercenarios modernizados, contratistas militares y actores privados de coerción, no sólo complementan las fuerzas regulares, sino que participan directamente en los bordes difusos del conflicto, dilapidando el espacio entre lo estatal y lo privado. Esta erosión del monopolio no ocurre de manera aislada, sino que es parte integral de la crisis del LIO que denota la reconfiguración de sus fundamentos básicos; la soberanía estatal se recalibra, el poder coercitivo no es exclusivo sino compartido y las formas de legitimidad, responsabilidad y autoría quedan difusas. De esta forma, la libertad operativa en sus ambas dimensiones no solo se convierte en un estratégico para los estados, sino también en un motor profundo de transformación del principio de coerción estatal, mezclando lo público y lo privado, lo militar convencional y lo paraestatal.

Argumento 2: El mercado de la fuerza: hacia una re-privatización de la violencia y un orden internacional post-weberiano

La evolución del mercado global de los servicios militares y de seguridad privada (PMCs) deja de ser un fenómeno sectorial para erigirse como un termómetro de las transformaciones estructurales del orden internacional. Tal como lo advierte la literatura académica especializada, la privatización de la fuerza ha mutado hacia corporaciones globales alterando los esquemas tradicionales de seguridad (Avant, 2005; Swed & Crosbie, 2019). Dada la naturaleza mercantil de este fenómeno, dimensionar su escala operativa requiere recurrir a métricas financieras de la propia industria; en este sentido, análisis de mercado estiman que este sector alcanzó un valor aproximado de 260.050 millones de dólares en 2024, con una proyección de crecimiento que ascendería a 451.180 millones de dólares para 2034, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5,68% (Custom Market Insights, 2024). Esta expansión económica no solo responde meramente a una lógica de mercado; es el síntoma de una transformación estructural profunda

donde los estados, en su búsqueda por reducir costos políticos y maximizar su libertad operativa, han comenzado a externalizar de manera sistemática funciones que antaño consideraban el núcleo irreducible de su soberanía, conocido como el monopolio de la violencia legítima. La privatización de la guerra por lo tanto no puede entenderse como un servicio técnico auxiliar, sino como la mercantilización de la coerción estatal a una escala industrial, donde la seguridad se comercia y vende como cualquier otro bien en un mercado global que responde a las leyes de la oferta y la demanda, redefiniendo los contornos mismos de la autoridad en el sistema internacional.

Esta externalización masiva quedó evidenciada en los conflictos que marcaron la cúspide y paradójicamente, el principio del fin de la hegemonía incontestada del Orden Internacional Liberal. Durante la intervención en Afganistán, la dependencia de los contratistas privados alcanzó niveles históricos que revelaban una mutación operativa profunda. Un informe del *Congressional Research Service* destacó que, en diciembre de 2008, los contratistas representaban el 69% de la fuerza laboral total del Departamento de Defensa (DOD) estadounidense en el país, el porcentaje más alto registrado en cualquier conflicto en la historia de los Estados Unidos. Para septiembre de 2009, esta dependencia se hizo aún más patente en el ámbito de la seguridad armada, donde el número de contratistas de seguridad privada armados se disparó a 10,712 individuos, un aumento del 236% en apenas nueve meses. Esta cifra no solo ilustra la escala cuantitativa de la privatización, sino que demuestra cualitativamente como el aparato bélico de las potencias liberales, incluso en el apogeo del LIO, se sostuvo crecientemente sobre una base contractual y mercantil, erosionando desde dentro los principios de rendición de cuentas y transparencia. La evolución del fenómeno, sin embargo, revela una mutación cualitativa aún más significativa. Lejos de ser un modelo exclusivo de las potencias occidentales, ha sido, adoptado, adaptado y perfeccionado por actores revisionistas, dando lugar a un nuevo paradigma de proyección de poder e influencia geopolítica que desafía abiertamente los fundamentos weberianos del estado. El Grupo Wagner de Rusia es el epítome de esta transformación. Según documentos internos del gobierno ruso pertenecientes a “TASS” (2023), Wagner operaba ofreciendo a gobiernos africanos un “paquete de supervivencia regime” que incluía seguridad, entrenamiento militar y protección para juntas militares a cambio de concesiones exclusivas sobre recursos naturales estratégicos como oro, uranio y litio. Se estima que Rusia extrajo 2,500 millones de dólares en oro de África en 2024 y 2023 (Reuters, 2024), fondos que muy probablemente fueron utilizados para financiar sus esfuerzos de guerra en Ucrania, es un claro ejemplo de cómo la coerción privatizada

puede generar un circuito autofinanciado de poder. Este modelo, donde la violencia se intercambia directamente por riqueza mineral e influencia política en mercados grises, consolida un orden internacional post-weberiano donde la soberanía se transa en el mercado y las PMCs actúan como vectores de un neocolonialismo del siglo XXI.

El surgimiento de este mercado global de la fuerza, cuantificado en cientos de miles de millones de dólares y con una huella operativa que llegó a superar en números a los ejércitos nacionales en teatros de guerra clave, trasciende por completo la mera externalización logística. Este fenómeno constituye la aparición de un principio de organización política que se creía superado por el estado westfaliano: la legitimación de actores violentos no estatales con alcance global. La consecuencia directa e inevitable de esta mercantilización de la violencia es la erosión del axioma weberiano que definió al estado moderno durante siglos. Ya no se trata de que los estados deleguen funciones, sino que el monopolio de la violencia legítima, su atributo definitorio, se está convirtiendo en un oligopolio compartido con corporaciones privadas que operan en los intersticios de la ley. Es esta reconfiguración fundamental de la arquitectura del poder global la que este argumento se propone desarrollar a continuación.

La re-privatización de la guerra: de Irak a República Centroafricana

La re-privatización de la guerra sólo tiene sentido en virtud de que prácticamente siempre ha existido alguna forma de privatización previa del uso de la violencia; mercenarios, corsarios, compañías de armas históricas. Lo que distingue lo moderno no es la intervención del mercenarismo, sino su transformación, su escala, su legitimación contractual y corporativa. Singer define al operador moderno de PMC como la evolución corporativa del antiguo concepto de mercenario individual o como el autor los llama “perros de la guerra”; sin embargo, ya no se trata del individuo suelto al servicio del mejor postor, sino de empresas con estructura administrativa, modelos de negocio, cadenas globales, responsabilidad contractual, etc. (Singer, 2005). Esta evolución histórica le permite al concepto de reprivatización situarse como un punto de inflexión, no como algo radicalmente nuevo, sino como la intensificación y formalización de algo que ya existía, pero estaba marginalizado o legalmente ambiguo. La re-privatización también supone que la guerra deja de ser exclusivamente una actividad estatal de monopolio formal para convertirse en un mercado: mercado de seguridad, mercado de violencia

privada licitada, donde estados, corporaciones, inversores privados, contratistas internacionales compiten, ofrecen servicios, capacidad técnica y personal especializado. En ese mercado la empresa PMC moderna se comporta como una firma especializada, con riesgos, contratos, pagos, reputación y escalabilidad. Esta mercantilización de la fuerza altera las lógicas tradicionales de la guerra, donde la lealtad, la carnicería directa y la conscripción eran herramientas principales.

En contextos de debilitamiento institucional, fragilidad estatal o crisis del LIO, esa privatización cobra especial impulso. El LIO, basado en un plano normativo rígido y estricto se encuentra en crisis. En ese debilitamiento, los estados encuentran espacio para externalizar funciones coercitivas, los estados que antes debían sujetarse a tratados, organismos internacionales, tribunales o presión de ONG, hoy encuentran que esas instituciones tienen menos capacidad para sancionar o monitorear. Por lo tanto, la estructura misma del sistema incentiva a los actores a adoptar estrategias alineadas a sus propios intereses nacionales. Otra dimensión de este fenómeno se refiere a su profesionalización tecnológica. Mientras que los mercenarios clásicos dependen de habilidades individuales, lealtades personales o contratos ad hoc, las PMCs modernas incorporan tecnología avanzada, conocimiento técnico especializado, cadenas de suministros logísticas globalizadas, sofisticados sistemas de inteligencia, comunicaciones seguras, drones, soporte remoto. Esta capacidad técnica permite no solo aumentar la escala operativa, sino hacerlo con precisión, con menor visibilidad, con mayor control del daño colateral; elementos que antes eran impensables. El otro cambio es la modificación de la temporalidad y la persistencia de la violencia privada. No se trata solo de operaciones puntuales o campañas de guerras declaradas, sino de presencia continua; guardias privadas, contratistas de seguridad para corporaciones extractivas, protección de intereses estratégicos y el control de zonas de influencia, incluso en tiempos de “paz”. La violencia privada se institucionaliza en lo cotidiano, no solo en lo bélico, las crisis locales son transformadas en espacios donde lo privado ejerce funciones constantes de control denotando así una ampliación operativa de estas fuerzas. Esta transformación afecta la escalabilidad y distribución geográfica del uso privado de la fuerza. PMCs hoy pueden operar en múltiples teatros simultáneamente, prestando servicios a varios estados o incluso a actores no estatales, actuando en zonas remotas, territorios de difícil acceso, áreas donde el control estatal es limitado, etc. Hoy las PMCs tienen capacidad logística global, financiamiento o respaldo indirecto de redes estatales, conexiones internacionales de compra de armamento o tecnología.

Finalmente, la re-privatización de la guerra se define, en síntesis, como el proceso por el cual la fuerza, la seguridad y las funciones militares se delegan a actores privados organizados, permanentes, regulares y con capacidad técnica significativa. Este fenómeno no es una mera continuidad del mercenarismo clásico, sino su transformación institucional: empresas privadas que ofrecen servicios que van desde la logística hasta el combate directo, la inteligencia y la protección estratégica. Es importante distinguir las operaciones de Irak donde la privatización se expandió rápidamente como parte de la estrategia post 9/11 en el marco del LIO, de las operaciones más recientes, pues en estos últimos casos la re-privatización se mezcla con dinámicas de crisis del LIO; con normas menos efectivas, con actores multilaterales debilitados, con una creciente tolerancia internacional uso discrecional de la fuerza privada, con fragmentación de jurisdicciones. Al comparar esos momentos, es plausible revelar implicaciones esenciales para la estructura internacional: la reprivatización aporta al debilitamiento del monopolio estatal de la violencia, mitiga los marcos legales internacionales tal como fueron concebidos en el LIO, y desencadena un régimen de coerción híbrido, una mezcla de lo público y lo privado, lo estatal y lo paraestatal que redefine las nociones de soberanía, responsabilidad internacional y legitimidad.

Caso de Irak y Blackwater

Al profundizar en las implicancias de este fenómeno de las PMCs en estos países en el auge del LIO, es imperativo reducir el foco del análisis a su exponente más representativo, es decir, Blackwater (posteriormente Xe Services, Academi). Blackwater Usa no fue una empresa militar privada más; fue el exponente máximo del fenómeno durante la Guerra Global contra el Terror. Su trayectoria, desde su fundación en 1997 por el ex Navy Seal Erik Prince, encapsula las promesas operativas y los profundos riesgos normativos de la externalización de la coerción estatal en el contexto de la hegemonía estadounidense. Estudiar Blackwater en última instancia significa analizar cómo la herramienta diseñada para maximizar la eficacia del hegemon devino en un factor corrosivo para su legitimidad. Esta PMC emerge no como un ejército mercenario tradicional, sino como una corporación capitalista moderna que respondía a una demanda estatal precisa, proveer servicios de entrenamiento y seguridad de alta calidad en un contexto donde las fuerzas regulares estaban sobreextendidas. Su evolución en Irak fue sintomática de una externalización creciente; comenzó con contratos de entrenamiento, pero el vacío de seguridad y la necesidad de proteger a diplomáticos y altos funcionario

(como el jefe de Autoridad Provisional de la Coalición, Paul Bremer) la catapultaron a la primera línea de la ocupación según *Medium* (2023). Se convirtió en la escolta omnipresente, una fuerza que operaba con una agilidad y un perfil bajo que las fuerzas regulares, sometidas a la cadena de mando más rígida y a un escrutinio más directo, no podían emular. La magnitud de este fenómeno no puede ser subestimada. Para finales de 2006, existían más de 100.000 contratistas militares de diversas nacionalidades trabajando para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, una cifra que eclipsaba los aproximadamente 10.000 de la Guerra del Golfo. Esta dependencia alcanzó su pico a principios de 2008, cuando la cantidad de contratistas empleados por Estados Unidos superó los 190.000, excediendo por primera vez el número de soldados estadounidenses desplegados. Blackwater se erigió como el principal contratista de seguridad para el Departamento de Estado, demostrando que la externalización no era un complemento, sino la columna vertebral logística y de seguridad de la presencia estadounidense. Son precisamente estas cifras de despliegue las que proveen la evidencia empírica para comprender como opera la dimensión política de la libertad operativa. Para el gobierno de Bush, esta PMC y sus homólogas permitieron una proyección de poder escalable sin necesidad de debates congresionales exhaustivos para cada despliegue o una movilización nacional masiva. Operaban bajo una ambigüedad calculada que facilitaba la negación plausible, es decir, las acciones controvertidas podían ser atribuidas a “contratistas incontrolados”, diluyendo la responsabilidad directa del estado contratante. Este modelo ofrecía una solución funcional al dilema del estado liberal, permitiendo perseguir objetivos estratégicos en un escenario internacional estable pero peligroso para la imagen política de los dirigentes estadounidenses, el hecho que las bajas de contratistas no fueran contadas por ninguna institución estatal relacionada al gobierno americano (Singer, 2005) permite una mayor comprensión de los incentivos a seguir esta estrategia. El corazón de esta eficacia política residía en la transferencia de riesgo. La “sensibilidad a las bajas” en democracias en contraba su antídoto práctico en las PMCs. Las bajas de estos actores privados no generaban la misma presión política, mediática ni parlamentaria que las de los uniformados. Como documenta Singer (2005), esta externalización no era un mero ahorro logístico, sino una reingeniería de la proyección de poder externo, un incremento decisivo en la libertad operativa al amortiguar el costo político doméstico. Los contratistas se convirtieron en un escudo contra el desgaste electoral, permitiendo una intervención prolongada que, de haber sido ejecutada sólo con fuerzas regulares, hubiera encontrado una oposición interna potencialmente insalvable.

Sin embargo, la misma opacidad que garantiza la libertad operativa contenía el germen de la ilegitimidad. El punto de inflexión ocurrió el 16 de septiembre de 2007 en Bagdad, cuando guardias de seguridad de Blackwater abrieron fuego en la plaza Nisour, matando a 17 civiles iraquíes desarmados. Este evento no fue una anomalía, sino la consecuencia lógica de un marco de impunidad estructural. El hecho, amplificado por la globalización mediática, expuso la hipocresía entre los ideales liberales proclamados por el LIO y la realidad de una guerra sucia y mercantil, erosionando la autoridad moral de Washington a nivel global. La masacre de Nisour puso de relieve el vacío legal en que operaban las PMCs. Este vacío fue, en parte, institucionalizado por la Orden Número 17 de la Autoridad Provisional de la Coalición, firmada por el mismo Paul Bremer, que otorgaba a los contratistas inmunidad frente a las leyes iraquíes. Aunque esta orden fue derogada posteriormente por la presión del gobierno iraquí, ilustraba como la búsqueda de la libertad operativa chocaba frontalmente con el principio de “estado de derecho” que el LIO supuestamente encarnaba. Los contratistas ocupaban una zona gris donde la violencia no era cuantificable ni ante la justicia iraquí ni, inicialmente, ante la estadounidense, corroyendo así un pilar fundamental del LIO: la sujeción del poder a normas jurídicas. Es crucial entender que el fenómeno Blackwater solo pudo florecer y desarrollarse en el contexto unipolar de la pos-guerra fría y el momento post-11S. En ese momento de hegemonía absoluta, Estados Unidos contaba con la autoridad y la capacidad para reescribir las reglas del juego internacional. Existía una noción optimista en que la fuerza incluso privatizada, podía imponer los valores liberales en un contexto de fe en los efectos de la globalización que llevó a aplicar la lógica de la externalización y la eficiencia del mercado incluso al ámbito de la guerra. Blackwater fue, en este sentido, la herramienta perfecta para un hegemon que confiaba en poder moldear el sistema a su imagen sin pagar un precio normativo elevado.

La paradoja final de Blackwater reside en que, mientras fue instrumental para los objetivos tácticos de Estados Unidos en Irak, se convirtió en un lastre corrosivo para su estrategia de liderazgo global. La impunidad de la compañía se transformó en un símbolo de la arrogancia del poder estadounidense, alimentando el antiamericanismo y minando la credibilidad de Washington como garante de un basado en normas. Lejos de fortalecer la posición de EE. UU, su uso contribuyó a un deterioro de su soft power, demostrando que la libertad operativa se conseguía a expensas de la legitimidad. La influencia destabilizadora de esta PMC fue evidente desde los primeros compases de la ocupación. En marzo de 2004, un enfrentamiento previo culminó en la emboscada y muerte de cuatro contratistas de blackwater en Faluya. Sus

cuerpos fueron mutilados y colgados de un puente. La respuesta estadounidense fue la Operación “Vigilante Resolve”, que desencadenó la primera Batalla de Faluya, un conflicto urbano brutal que causó cientos de bajas civiles y que es comúnmente asociado al evento detonante que avivó la insurgencia y sumió a Irak en una espiral de violencia sectaria. La acción de un elemento PMC, alteró el curso mismo del conflicto. El verdadero testamento de la utilidad estratégica de las PMCs para la libertad operativa llegó con la retirada militar formal. Cuando las tropas estadounidenses abandonaron Irak en 2011, el Departamento de Estado planeó mantener una “presencia masiva” que dependía de una fuerza de más de 5000 contratistas de seguridad para proteger a su personal diplomático. Esto permitía a EE.UU mantener una influencia sustancial y una capacidad de acción en el país, dando al mismo tiempo la impresión pública de un fin de la intervención. Era la privatización de la continuidad, un mecanismo para sostener los intereses estratégicos en un contexto de crecientes restricciones políticas domésticas e internacionales para un despliegue militar abierto.

En conclusión, la historia de Blackwater en Irak es la de un instrumento que refleja la confianza hegemónica del LIO en su auge, pero que simultáneamente aceleró sus crisis de legitimidad. Mientras sus servicios permitían a Washington proyectar poder con una libertad operativa sin precedentes, sus excesos expusieron la contradicción fundamental entre los medios empleados y los fines declarados. Blackwater se convirtió en el símbolo de un proyecto de orden internacional liberal que, en su implementación, recurre a prácticas realistas y opacas que minaban sus propios cimientos normativos. El legado de dicha compañía no es solo un catálogo de escándalos, sino la normalización de un modelo de coerción estatal externalizada y opaca. Sin embargo, este fenómeno no se estancó; mutó. Si Blackwater fue el instrumento de un hegemon que aún operaba dentro de las grietas del Orden Internacional Liberal ¿Que sucede cuando este orden se fragmenta aceleradamente? ¿Cómo se transforma el fenómeno de las PMCs cuando no son utilizadas por el centro del sistema, sino por sus potencias revisionistas que buscan explícitamente desafiarlo? La evolución hacia un entorno post-liberal da a luz a un nuevo arquetipo de compañía militar privada, radicalmente diferente en su naturaleza, sus métodos y sus fines últimos. El Grupo Wagner emerge como la encarnación de esta mutación: ya no es una corporación que responde a contratos, sino un instrumento de poder geopolítico desinhibido y una empresa de saqueo económico fusionadas en una sola entidad multipropósito. Su accionar, su financiamiento mediante la usurpación de recursos naturales y su desafío abierto al monopolio de la violencia weberiano, plantean preguntas

apremiantes, ¿Estamos ante la re-privatización final de la guerra, donde los actores no estatales pueden dictar la política de los estados? ¿Anuncia el modelo Wagner un futuro de competencia geopolítica donde las reglas han sido no reinterpretadas, sino directamente abandonadas, dando paso a una nueva era de realismo crudo y mercantilizado? Explorar la anatomía de Wagner y sus operaciones en República Centroafricana nos permite adentrarnos en el corazón mismo del orden internacional contemporáneo y sus tendencias.

Caso de República centroafricana y Grupo Wagner

Para comprender la reconfiguración global de las PMCs, es indispensable analizar el caso del Grupo Wagner, cuyas operaciones en República Centroafricana (RCA) resultan muy representativas. Este escenario no representa una intervención aislada, sino el laboratorio donde Wagner perfeccionó su “paquete de supervivencia de regímenes”, el cual consiste en una oferta integral de seguridad por recursos naturales e influencia política, encapsulando la esencia de la mutación post-liberal en la arquitectura del comercio internacional. El Grupo Wagner se fundó en 2014 como una organización paramilitar rusa, fundada por el empresario Yevgeny Prigozhin y el ex teniente coronel del GRU Dmitry Utkin. Aunque formalmente es una empresa militar privada, su naturaleza es híbrida; funciona como un proxy del estado ruso, permitiendo a Moscú una negación plausible en operaciones militares en el extranjero y ocultando el verdadero costo humano y financiero de sus intervenciones. Wagner llega la RCA en 2018, tras la solicitud de ayuda del presidente Faustin-Archange Touadera para enfrentar a grupos rebeldes. Según la BBC (2024) el grupo no se limitó a funciones de seguridad, sino que implementó un “plan para la captura del estado”, infiltrándose en cuatro pilares fundamentales: el político, el económico, el militar y el informativo. Esta infiltración multisistémica le permitió comprometer las instituciones del país para promover sus intereses financieros y geopolíticos. El modelo de negocio de Wagner en la RCA opera como una lógica de truke contemporáneo. A cambio de sus servicios de seguridad que incluyen la protección del presidente, el entrenamiento del ejército nacional y operaciones ofensivas contra rebeldes, el grupo obtuvo concesiones exclusivas sobre recursos naturales estratégicos, como minas de oro y diamantes, así como derechos para la explotación maderera. Esta transacción con tintes colonialistas convierte la soberanía en una mercancía transable. Es de esta forma que la presencia de Wagner trasciende lo militar. Empresas vinculadas a la red de Prigozhin, como Lobaye Invest, se encargan de la extracción directa de oro y diamantes.

Otras se dedican a la producción de cerveza, la comercialización de vodka o negocios azucareros en Bangui, tejiendo una red de influencia económica que une los intereses de la PMC con la economía local. Esta diversificación consolida un circuito autofinanciado de poder donde la coerción genera riqueza y la riqueza sostiene la coerción (DW,2024).

Wagner complementa su poder duro con una sofisticada estrategia de influencia. Según DW (2024) a través de la “Casa Rusa” en Bangui, se promueve la lengua y cultura rusas, se difunde propaganda antioccidental y se construye una narrativa de Rusia como aliado confiable, en contraste con la fallida intervención francesa. La iglesia ortodoxa rusa se ha erigido como un símbolo de estos lazos en el país. El modelo de seguridad de Wagner se sustenta en una brutalidad sistémica. Organizaciones como *The sentry* y *Human rights watch* han documentado que los elementos de PMC son responsables de abusos generalizados de derechos humanos incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones y masacres. La impunidad es casi absoluta debido a la complicidad del gobierno local y el vacío legal internacional que rodea las operaciones de las PMCs, erosionando cualquier noción de “estado de derechos”.

La relación entre Wagner y el Kremlin es convergente. El grupo actúa como un agente no oficial de la política exterior rusa, permitiendo a Moscú proyectar poder e influencia en regiones estratégicas sin el escrutinio y las restricciones que enfrenta el estado ruso ante una intervención militar oficial. Los recursos extraídos, como, proveen a Rusia de un flujo de capital en efectivo que potencialmente se ha destinado a financiar el esfuerzo de guerra en Ucrania, eludiendo sanciones internacionales. La rebelión fallida de Prigozhin en junio de 2023 y su posterior asesinato llevaron a una reestructuración. El control de las operaciones africanas de Wagner fue transferido directamente a la inteligencia militar rusa (GRU), específicamente al general Andrey Averynov, y se creó el “Africa Korps” como una estructura más formal bajo el Ministerio de Defensa. En la RCA, sin embargo, se sospecha que Pavel Prigozhin mantiene un cierto control autónomo de las operaciones, indicando una transición gradual. La comparación con Blackwater es ilustrativa de la mutación global. Mientras Blackwater operaba en el marco del LIO hegemónico, Wagner surge en la grieta de ese mismo orden, como un instrumento de una potencia revisionista. Blackwater externaliza funciones; Wagner externaliza la soberanía misma. La expansión de Wagner es un síntoma patente de la crisis estructural del Orden Internacional Liberal. Su modelo demuestra que la soberanía estatal westfaliana puede ser mercantilizada en el merca-

do. Donde el LIO promovía la seguridad colectiva y los derechos humanos, esta nueva reconfiguración muestra una alternativa con características de un orden realista donde la seguridad y la guerra son privatizadas y la soberanía únicamente es detenida por aquellos estados que poseen los medios materiales para garantizarla. Wagner no es una mera continuación del mercenarismo clásico, sino su transformación institucional en un régimen de coerción híbrido. Encarna un orden post-weberiano donde el monopolio estatal de la violencia legítima se convierte en un oligopolio compartido con actores paramilitares globales.

El legado de Wagner en África anuncia la configuración de un orden internacional más fragmentado y regido por lógicas realistas. Si Blackwater fue un producto del auge del LIO, Wagner es el heraldo de su agotamiento. Su éxito al establecer un modelo de influencia basado en la coerción mercenaria, la maximización de la libertad operativa rusa y la extracción depredadora no solo refleja la crisis del LIO, sino que acelera activamente su mutación hacia un sistema más caótico y competitivo.

Un orden Post-Weberiano

La conceptualización weberiana del Estado moderno, definido por su monopolio legítimo de la violencia física dentro de un territorio determinado, ha servido durante siglos como el pilar ontológico del sistema westfaliano. Este axioma no solo delimita la soberanía interna, sino que también constituye el ladrillo fundamental sobre el cual se erigió la arquitectura del orden internacional posterior, es decir, los estados como únicos titulares legítimos de la coerción, eran los actores primarios y los interlocutores necesarios para la guerra, la paz y la diplomacia. El Orden Internacional Liberal, en su aspiración normativa, no abolía este principio, sino que pretendía regular e institucionalizar a través de mecanismos de seguridad colectiva, derechos internacional y multilateralismo. La expansión estructural y cualitativamente distinta de las empresas militares privadas en el siglo XXI constituye una de las fisuras de este edificio conceptual. La “re-privatización de la guerra” no es una mera delegación de funciones, sino un proceso de segregación del poder estatal que socava la propia esencia del modelo weberiano. Cuando corporaciones privadas despliegan capacidades coercitivas que rivalizan o superan a las de muchos ejércitos nacionales, y lo hacen de manera transnacional y con un alto grado de autonomía, el monopolio deja de ser tal para convertirse en un oligopolio coercitivo. Este orden post-weberiano se

caracteriza por el surgimiento de un régimen de coerción híbrido, donde las fronteras entre lo público y lo privado se diluyen. En este régimen, la violencia ya no es un atributo exclusivo del estado, sino un servicio transable en un mercado global. La legitimidad, que para Weber emanaba de la estructura estatal, se fragmenta en este nuevo contexto; la eficacia operativa, la rentabilidad económica y la lealtad contractual comienzan a competir con la legitimidad política tradicional como fundamentos de la autoridad coercitiva.

El caso de Blackwater en Irak representa la fase inicial de esta transición. Su operación se desarrolló dentro del paraguas político y legal de un estado hegemónico, Estados Unidos. Su función en fue ampliar la libertad operativa del estado contratante, pero la autoridad última y la responsabilidad principal seguían residiendo en Washington. Sin embargo, al institucionalizar la externalización y operar en vacío de accountability, Blackwater demostró que el núcleo duro de la soberanía estatal podrá ser subcontratado, preparando el terreno para una mutación más radical. Es con el Grupo Wagner en la RCA donde el modelo postweberiano comienza a expresarse más claramente. Wagner no es un mero contratista; es un actor geopolítico con agenda propia que opera conjuntamente, aunque manteniendo un margen de autonomía con el estado ruso. Su “paquete de supervivencia” no fortalece al estado centroafricano, sino que lo captura, reemplazando funciones de soberanía con un esquema de protección privada y extracción económica. En este caso la violencia legítima ya no es monopolio del estado (RCA) ni es ejercida de manera directa y transparente por otro, sino que es administrada por una entidad privada. La consecuencia directa de esta dinámica es la mercantilización de la soberanía. En el orden post-weberiano, los estados frágiles o fallidos pueden canjear el control de sus recursos y en última instancia su política soberana, a cambio de seguridad. Este trueque no se da entre estados en el marco del derecho internacional, sino entre un gobierno local y una corporación, lo que potencialmente genera un nuevo modelo de neocolonialismo donde los ejércitos privados son los pilares fundamentales de influencia y la acumulación de capital.

Esta transformación por ende tiene implicaciones profundas para la arquitectura del LIO. El orden internacional liberal se sustentaba en la posibilidad de regular la coerción interestatal a través de instituciones y normas. Sin embargo ¿cómo puede un sistema basado en la relación entre estados regular a actores que operan en los intersticios de lo estatal y lo privado? La “re-privatización” de la guerra elude los mecanismos de control del LIO, y por ende su capacidad sancionatoria tradicional; el consejo de seguridad de la

ONU, los tratados de derechos humanos y el derecho internacional humanitario se muestran notablemente ineficientes para lidiar con la ambigüedad jurídica que caracterizan a las PMCs actuales. La “accountability” se vuelve impensable en estos escenarios. Las bajas causadas por contratistas no figuran en los registros oficiales de los estados; los crímenes de guerra quedan en un limbo jurídico; y la financiación, a menudo atada a la explotación de recursos, escapa al escrutinio presupuestario de los parlamentos. Fundamentalmente el principal problema con este accionar de las PMCs es que realmente son un recurso de valor para las potencias, puesto que en un orden cuyo marco normativo tiende a diluirse, estas actúan únicamente en pos de sus propios intereses nacionales y estratégicos. En conclusión, la categoría de “orden postweberiano” sintetiza la transformación de un sistema donde la coerción era un instrumento político monopolizado por estados soberanos, hacia un panorama global donde la coerción se ha convertido en una mercancía privatizada y desterritorializada. Esta mutación, catalizada por la búsqueda de libertad operativa y la reducción del costo político, no solo erosiona los cimientos del LIO, sino que define los contornos de un futuro internacional más competitivo, inestable y dirigido por lógicas de poder más realistas.

Argumento 3: La privatización de la violencia como catalizador de la transición postliberal del orden internacional

La privatización de la violencia organizada actúa como el catalizador decisivo de la mutación del orden internacional porque establece una relación de retroalimentación entre dos transformaciones estructurales: la erosión del estado weberiano desarrollada anteriormente y la descomposición del orden internacional liberal. La primera, denota la pérdida del monopolio de violencia legítima como atributo soberano fundamental. La segunda, de carácter post-liberal, describe la transformación a nivel sistémico, es decir, el colapso de la arquitectura normativa e institucional que regulaba la coerción interestatal. El fenómeno de las PMCs es el puente que une ambos niveles; al corroer la base weberiana de los estados, hace ingobernable e irrelevante el marco liberal del sistema, acelerando así la transición a un nuevo paradigma de competición geopolítica. En la dimensión post-weberiana, la catalización se evidencia en la normalización de herramientas de coerción híbridas que redefine soberanía. Lejos de ser exclusivamente una externalización logística puntual se trata de la delegación estructural de funciones soberanas nucleares. Un ejemplo muy paradigmático es Haití: la contratación de Vectus Global en 2025 no solo incluye operaciones de seguridad, sino un acuerdo para

la gestión de aduanas nacionales (Ackerson, 2025). En otras palabras, Haití canjea el control sobre su fiscalidad y su fuerza a cambio de su supervivencia inmediata. Esta práctica, que Wagner perfeccionó en RCA y que ahora se replica en contextos fuera del conflicto Este-Oeste, normaliza un modelo de estado donde el núcleo duro de la estatalidad ya no es público, sino un servicio contratable en el mercado global. Este modelo post-weberiano se consolida porque responde a la máxima ambición estatal en un sistema competitivo: la maximización de la libertad operativa. Para un gobierno como el haitiano, contratar una PMC significa obtener capacidad coercitiva inmediata, sin las restricciones burocráticas, al escrutinio público o las condicionalidades políticas de una misión multilateral. Para una potencia que respalda tácitamente estas operaciones, es un mecanismo de influencia de “baja intensidad” que evade los costos políticos de una intervención directa. De esta forma, la búsqueda de libertad operativa por parte de actores estatales en crisis se convierte en el motor que acelera la disolución del principio weberiano, por ende, del mismo LIO, creando un ecosistema donde las PMCs son indispensables.

La consecuencia inmediata de esta dinámica post-weberiana es su impacto catalizador en la dimensión post-liberal. El orden internacional liberal se sustentaba en mecanismos de accountability. Las PMCs operan sistemáticamente al margen de estos mecanismos. La opacidad de la intervención de Vectus Global en Haití, donde las cadenas de mando y las reglas de enfrentamiento son desconocidas, ilustra esta ilusión. Mientras, la Misión de la ONU demuestra la parálisis del multilateralismo. Esta incapacidad de la estructura liberal para regular la coerción privatizada no es un fallo, sino el síntoma de su decadencia. Las PMCs catalizan el orden post-liberal al demostrar que es posible, e incluso más eficaz para ciertos fines, proyectar poder fuera de sus marcos normativos. Esta transición hacia lo post-liberal posee un carácter marcadamente irreversible, principalmente por la fuerza de los incentivos. Para las potencias, las PMCs ofrecen un instrumento de negociación plausible a bajo costo político en escenarios de alta complejidad. Para las elites de estados frágiles, son la única garantía de supervivencias ante amenazas existenciales, como se vio con Touadera en RCA o con el gobierno haitiano. Para las propias empresas, es un mercado en expansión billonaria. Este triángulo de interés crea un circuito de poder autosostenido que deja de lado a las instituciones liberales. Intentar reimponer el monopolio weberiano o las estrictas reglas del LIO significa privar a estos actores de herramientas vitales para su seguridad y sus ambiciones, una posibilidad políticamente inviable en el nuevo contexto mundial.

La interacción de estas dos dimensiones da como síntesis un panorama internacional híbrido y post-liberal. Este no es un sistema de anarquía, sino uno de oligopolios coercitivos internacionales. En él, la seguridad ya no es provista exclusivamente por estados dentro de un marco de seguridad colectiva, sino por una diversidad de actores como los propios estados, PMCs que son proxies de potencias (Wagner), PMCs con agendas corporativas (Blackwater/Academi) y contratistas de seguridad que gestionan la soberanía (Vectus Global). La competencia geopolítica ya no se libra solo entre ejércitos regulares, sino a través de redes de influencia y coerción mercantilizadas, donde la legitimidad ya no emana de la soberanía popular o el derecho internacional, sino de la eficacia operativa y la capacidad de controlar territorios y recursos.

En conclusión, lejos de ser un mero síntoma menor, la re-privatización de la violencia es el catalizador que acelera y da forma concreta a la mutación del orden internacional. Al erosionar el principio weberiano, se despega a los estados de su cualidad definitoria casi sustantiva, y al eludir y vaciar de contenido las instituciones liberales, desarma el sistema diseñado para gestionar sus relaciones. El resultado no es la anarquía pura, sin embargo, sí implica el surgimiento de un orden post-liberal más realista, fragmentado y competitivo, donde la guerra y la paz como lo público y lo privado, se funden en una misma lógica de poder proyectable y transable. Las PMCs no solo navegan esta transición; sino que son sus principales arquitectas, redefiniendo la naturaleza misma de la autoridad en el siglo XXI. 

Referencias Bibliográficas

- Bijos, L., & de Souza, R. (2020). *Private Military Companies and the outsourcing of war: A spark of destabilisation to the global security*. *Annales de la Faculté de Droit d'Is-tanbul*, 69, 87–118. <https://doi.org/10.26650/Annales.2020.69.0004>
- Singer, P. W. (2005). Outsourcing war. *Foreign Affairs*, 84(2), 119–132. Council on Foreign Relations. <http://www.jstor.org/stable/20034280>
- Swed, O. (2020). *The path to outsourcing security in Southeast Asia*. Armed Forces, the State, and Society Series, Working Paper 2. New York University Center for Global Affairs. <https://www.researchgate.net/publication/340414670>
- Swed, O., & Crosbie, T. (2019). Trendlines: Privatization and the future of war and security. En O. Swed & T. Crosbie (Eds.), *The sociology of privatized security* (pp. 261–279). Palgrave
- Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98222-9_11

- Hurrell, A. (2024). Geopolitics and global economic governance. *Oxford Review of Economic Policy*, 40(2), 220–233. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grae013>
- Ikenberry, G. J. (2024). Three Worlds: the West, East and South and the competition to shape global order. *International Affairs*, 100(1), 121–138. <https://doi.org/10.1093/ia/iad284>
- Lake, D. A., Martin, L. L., & Risse, T. (2021). Challenges to the Liberal Order: Reflections on International Organization. *International Organization*, 75(2), 225–257. <https://doi.org/10.1017/S0020818320000636>
- Scahill, J. (2007). *Blackwater: The rise of the world's most powerful mercenary army*. Nation Books.
- Congressional Research Service. (2008). *Department of Defense Contractors in Iraq and Afghanistan: Background and Analysis* (CRS Report R40764).
- Isenberg, D. (2009). *Shadow Force: Private Security Contractors in Iraq*. Praeger Security International.
- Human Rights Watch. (2021). They Killed Them Like It Was Nothing: The Need for Justice for Crimes Committed by Central African Republic Forces and Russian Paramilitaries. <https://www.hrw.org/report/2021/10/14/they-killed-them-it-was-nothing/need-justice-crimescommitted-central-african>
- The Sentry. (2021). The Wagner Group: A Proxy Militia for Russia and a Tool for Exploiting Natural Resources in Africa. <https://thesentry.org/reports/wagner-group-russia-africa>
- Marten, K. (2019). Russia's use of semi-state security forces: The case of the Wagner Group. *Post-Soviet Affairs*, 35*(3), 181–204. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2019.1599622>
- International Crisis Group. (2024). Haiti's Last Resort: Gangs and the Prospect of Foreign Intervention (Report No. 94). International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/latinamerica-caribbean/haiti/94-haitis-last-resort-gangs-and-prospect-foreign-intervention>
- Samuel, K., & Malkin, E. (2024, 15 de octubre). Haiti's Next Chapter: An Interview with the Prime Minister. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2024/10/15/world/americas/haiti-prime-minister-interview.html>
- Avant, D. D. (2005). *The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security*. Cambridge University Press.
- Swed, O., & Crosbie, T. (Eds.). (2019). *The sociology of privatized security*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-98222-9>
- Singer, P. W. (2003). *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*. Cornell University Press.
- Custom Market Insights. (2024). *Private military security services market size, trends and insights*. <https://www.custommarketinsights.com/report/private-military-security-services-market/>
- Krahmann, E. (2010). *States, Citizens and the Privatization of Security*. Cambridge University Press.

- Clausewitz, C. von (1984). *De la guerra*. Editorial RBA. (Trabajo original publicado en 1832).
- Weber, M. (2012). *Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva* (F. Rubio Llorente, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1922).
- Kaldor, M. (1999). *New and old wars: Organized violence in a global era*. Stanford University Press.
- Ludendorff, E. (1935). *Der totale Krieg* (La Guerra Total). Ludendorffs Verlag.
- Münkler, H. (2005). *The new wars*. Polity Press.
- Mueller, J. E. (1973). *War, Presidents and Public Opinion*. John Wiley & Sons.
- Gelpi, C., Feaver, P. D., & Reifler, J. (2006). Success Matters: Casualty Sensitivity and the War in Iraq. *International Security*, 30(3), 7–46.
- Pew Research Center. (2007). Iraq War: Public Opinion. <https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/4/legacy-pdf/462.pdf>
- U.S. Army. (2017). *FM 3-0: Operations*. Department of the Army.
- Vines, A. (1999). Mercenaries and the Privatization of Security in Africa. *Brown Journal of World Affairs*, 6(2), 193–201.
- Medium. (2023). *Blackwater: The Rise and Fall of a Private Army*.
- BBC News. (2024, February 13). Wagner Group in Central African Republic: What is the Russian mercenary group up to now? <https://www.bbc.com/news/world-africa-68322230>
- DW News. (2024, 18 março). Como o Grupo Wagner atua em prol dos interesses russos na África. <https://www.dw.com/pt-br/como-o-grupo-wagner-atua-em-prol-dos-interesses-russosna-áfrica/a-70619142>
- Znak. (2018, 5 de marzo). Как выглядит лагерь ЧВК Вагнера в Краснодаре [How the Wagner PMC camp in Krasnodar looks]. Archivo de Internet. Recuperado 23 de mayo de 2024, de https://web.archive.org/web/20180309065754/https://www.znak.com/2018-0305/kak_vyglyadit_lager_chvk_vagnera_v_krasnodare
- Partlow, J. (2006, December 5). U.S. Citizens' Ranks Thin in Iraq's Civilian Police Training. *The Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/12/04/AR2006120401311.html>
- RIA Novosti. (2022, December 22). Минобороны РФ сообщило об окончании совместных с бойцами ЧВК Вагнера учений в российских полигонах [The Russian Defense Ministry announced the completion of joint exercises with Wagner PMC fighters at Russian training grounds]. <https://ria.ru/20221222/ucheniya-1839955827.html>
- Russian Defense Ministry. (2022, July 4). Appeal to the fighters of the Wagner Private Military Company [Archived press release]. Internet Archive. Retrieved May 23, 2024, from <https://web.archive.org/web/20220704145612/https://syria.tv/>

- TASS. (2023, June 27). Russian Defense Ministry says Wagner Group's fighters prepared weapons, military hardware for combat drills. <https://tass.com/defense/1638815>
- Wikipedia. (2024, May 22). Wagner Group. In Wikipedia. Retrieved May 23, 2024, from https://en.wikipedia.org/wiki/Wagner_Group#Relationship_with_the_Russian_state
- Reuters. (2024, February 2). Russia's Wagner group exported \$2.5 billion in African gold, says EU. Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/russias-wagner-group-exported-25-billion-african-goldsays-eu-2024-02-02/>
- Ikenberry, G. J. (2011). *Liberal Leviathan: The origins, crisis, and transformation of the American world order*. Princeton University Press.
- Ikenberry, G. J. (2018). The end of liberal international order? *International Affairs*, 94(1), 7–23. <https://doi.org/10.1093/ia/iix241>
- O'Donnell, G. (2004). The quality of democracy: Why the rule of law matters. *Journal of Democracy*, 15(4), 32–46. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0076>
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Bátora, J. (2021). States, interstitial organizations and the prospects for liberal international order. *International Affairs*, 97(5), 1433–1450. <https://doi.org/10.1093/ia/iiab108>
- Ackerson, M. (2025). *Haiti's Vectus gamble: Private force and private customs in a failing state*. <https://international-and-comparative-law-review.law.miami.edu/haitis-vec-tus-gamble-private-force-and-private-customs-in-a-failing-state/>

Nota: para la revisión de la coherencia textual y el orden argumentativo se utilizó la asistencia de una herramienta de inteligencia artificial (ChatGPT, OpenAI), bajo supervisión y revisión crítica personal.